Distr.
GENERAL

CCPR/C/70/Add.3
4 de diciembre de 1992

Original: ESPAÑOL

COMITE DE DERECHOS HUMANOS

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES
EN VIRTUD DEL ARTICULO 40 DEL PACTO

Tercer informe periódico que los Estados Partes
debían presentar en 1991

REPUBLICA DOMINICANA*

[15 de junio de 1992]

INDICE

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
I. GENERALIDADES	1 - 26	1
A. Descripción geográfica	6 - 9	1
B. Perfil demográfico 1990	10 - 11	2
C. Perfil económico 1990	12 - 13	2

* Para consultar el informe inicial presentado por el Gobierno de la República Dominicana, véase el documento CCPR/C/6/Add.10; en cuanto a su examen por el Comité, véanse los documentos CCPR/C/SR.577, SR.578, SR.581 y SR.582 y los Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo período de sesiones, Suplemento N° 40 (A/40/40), párrs. 382 a 429. Para consultar el segundo informe periódico presentado por el Gobierno de la República Dominicana, véase el documento CCPR/C/32/Add.16; en cuanto a su examen por el Comité, véanse los documentos CCPR/C/SR.967 a SR.970 y Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo quinto período de sesiones, Suplemento N° 40 (A/45/40), párrs. 355 a 387.

GE.92-18830/8759f (S)

INDICE (continuación)

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
I. (<u>continuación</u>)		
D. Perfil cultural 1990	14	2
E. Estructura política	15	3
F. Marco normativo general de los derechos humanos ..	16 - 26	3
II. INFORMACION RELATIVA A LOS ARTICULOS DE LAS PARTES I, II Y III DEL PACTO	27 - 116	7
Artículo 2	27 - 30	7
Artículo 3	31 - 32	8
Artículo 4	33 - 37	8
Artículo 5	38 - 39	9
Artículo 6	40 - 44	9
Artículo 7	45 - 53	10
Artículo 8	54	11
Artículo 9	55 - 61	11
Artículo 10	62 - 63	13
Artículo 11	64	13
Artículo 12	65 - 68	13
Artículo 13	69 - 74	14
Artículo 14	75 - 78	17
Artículo 15	79 - 81	17
Artículo 16	82	18
Artículo 17	83 - 87	18

INDICE (continuación)

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
II. (<u>continuación</u>)		
Artículo 18	88 - 90	19
Artículo 19	91 - 93	20
Artículo 20	94 - 95	20
Artículos 21 y 22	96 - 103	20
Artículo 23	104 - 106	22
Artículo 24	107 - 109	22
Artículo 25	110 - 111	24
Artículo 26	112 - 113	24
Artículo 27	114 - 116	24

I. GENERALIDADES

1. Los derechos reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se encuentran estatuidos y protegidos en la República Dominicana por la Constitución Nacional, especialmente en las disposiciones contenidas en los artículos II, V y XI, y por varias leyes de las cuales se hará mención en este informe al hacerse referencia a cada uno de los artículos incluidos en las partes I, II y III del Pacto.

2. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana la Constitución Nacional es la norma suprema que prevalece sobre las demás normas emanadas de los distintos órganos del poder público.

La Constitución vigente fue adoptada en el año 1966; el texto completo de la Constitución se encuentra anexo al presente informe.

3. Los tratados y convenciones internacionales aprobados y ratificados por el Congreso Nacional quedan incorporados a la legislación interna.

4. En consecuencia, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado y ratificado por resolución N° 684 de fecha 27 de octubre de 1977 y publicado en la Gaceta Oficial N° 9451 de fecha 12 de noviembre de 1977, forma parte de la legislación interna dominicana. También se encuentran incorporados el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.

5. Los mencionados instrumentos internacionales suplen cualquier vacío o deficiencia en materia de reconocimiento de derechos humanos que pueda existir en el resto de la legislación vigente.

A. Descripción geográfica

6. La República Dominicana es uno de los países en que se divide la isla de la Hispaniola que comparte con la vecina República de Haití, a través de una franja fronteriza de 338 km.

7. La República Dominicana ocupa la parte oriental de la isla, con una extensión superficial de 48.442 km², midiendo 390 km de este a oeste y 265 km de norte a sur. Bañada por el mar Caribe al sur y el océano Atlántico al norte, sus costas tienen una extensión de 1.575 km.

8. De topografía generalmente alomada, cuatro ramales, casi paralelos, de montañas cubiertas de espesa vegetación, atraviesan el país de este a oeste, hallándose en el mayor de ellos la cordillera central, el Pico Duarte, la mayor altura de las Antillas, con una elevación de 3.175 m sobre el nivel del mar. Entre las cordilleras central y septentrional se halla la fértil región del Cibao, un hermoso valle, muy poblado y con una abundante y diversificada producción agrícola y ganadera.

9. Con lluvias esparcidas durante casi todo el año, pero concentradas mayormente entre los meses de mayo a junio y de septiembre a noviembre, la isla goza de un clima tropical, modificado por las brisas marinas y las corrientes oceánicas que oscila de 18 a 28°C.

B. Perfil demográfico 1990

10. Para el año 1990 la población estimada del país era de 7,2 millones de habitantes, con una presión demográfica de 148,4 habitantes por km². La tasa de crecimiento es de 2,2% anual.

11. Otros indicadores para 1990 son los siguientes:

Índice de natalidad:	31,3
Índice de mortalidad:	6,8
Tasa de fecundidad:	3,8 hijos por mujer
Esperanza de vida al nacer:	65,9 años
Población urbana:	60,4%
Población rural:	39,6%
Población masculina:	50,8%
Población femenina:	49,2%
Población menor de 15 años:	39,3%
Población mayor de 65 años:	3,3%
Tasa de mortalidad infantil:	85 por mil

C. Perfil económico 1990

12. Los indicadores de carácter económico para 1990 son los siguientes:

PBI a precios corrientes:	RD\$ 60.555 millones = 7.091 millones de dólares de los EE.UU.
Ingreso per cápita:	999,00 dólares de los EE.UU.
Tasa de cambio promedio:	1 dólar = RD\$ 8,54
Tasa de inflación:	100,68%
Deuda externa:	4.211,8 millones de dólares de los EE.UU.
Deuda externa per cápita:	584,97 dólares de los EE.UU.
Exportaciones:	704,0 millones de dólares de los EE.UU.
Importaciones:	1.807,1 millones de dólares de los EE.UU.
Balanza comercial:	-1.103,1 millones de dólares de los EE.UU.
Fuerza laboral:	3 millones
Tasa de desempleo:	29,2%

13. La República Dominicana es un país eminentemente agropecuario que basa su intercambio comercial en la producción agrícola y ganadera (azúcar de caña, café, cacao, tabaco, carnes). La exportación de metales tiene también alguna significación, así como la estructura turística, que se ha venido desarrollando en los últimos años como fuente generadora de divisas.

D. Perfil cultural 1990

14. Algunos datos estadísticos sobre la vida cultural son los siguientes:

Tasa de alfabetización:	77,3%
Tasa de analfabetismo:	22,7%
Lengua materna:	español
Religión católica:	96,6%
Religión protestante:	1,2%
Otras	2,2%
Población en edad escolar:	43,1%
Estudiantes universitarios:	1,6%

E. Estructura política

15. La República Dominicana tiene un gobierno civil, democrático, representativo y republicano. Integran el Estado tres poderes:

- a) El ejecutivo, ejercido por el Presidente de la República, elegido cada cuatro años conforme lo establece la Constitución, quien se asesora de un gabinete compuesto por 13 Secretarios de Estado.
- b) El poder legislativo, que reside en dos cámaras: el Senado, con 30 miembros, uno por cada provincia (29) y el Distrito Nacional, y la de Diputados o Cámara Baja, con 120 miembros.
- c) El poder judicial, constituido por una Suprema Corte de Justicia integrada por 11 magistrados. Existe la Procuraduría General de la República y 8 Cortes de Apelación que representan sendos departamentos judiciales. Cada una de las 29 provincias es un distrito judicial en el cual funciona un juzgado de primera instancia. Además de los tribunales de derecho común existen tribunales especiales como el Tribunal de Tierras y la Cámara de Cuentas que tiene atribuciones de Tribunal Superior Administrativo. La Corte de Casación la ejerce la Suprema Corte de Justicia en adición a sus funciones. En la República Dominicana los institutos castrenses, en lo que a sus miembros respecta, se rigen por el Código de Justicia de las fuerzas armadas.

F. Marco normativo general de los derechos humanos

16. La Procuraduría General de la República es el órgano competente para velar por el respeto pleno de los derechos humanos.

17. La sección segunda del Código Penal en su artículo 114 señala:
"Los funcionarios públicos, agentes o delegados del Gobierno, que hubieren ordenado o cometido un acto arbitrario o atentatorio a la libertad individual, a los derechos políticos de uno o muchos ciudadanos, o a la Constitución, serán condenados a la pena de la degradación cívica. Si justificaren, sin embargo, que han obrado por orden de superiores a quienes debían abediencia jerárquica por asuntos de su competencia, quedarán exentos de la pena, la que en este caso se aplicará a los superiores que hubieren dado la orden".

18. La protección de los derechos humanos en la República Dominicana es materia constitucional. Efectivamente, el artículo 8 de la Constitución de la República, sobre los derechos individuales y sociales, establece, entre otras disposiciones, las siguientes:

"Artículo 8. Se reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos. Para garantizar la realización de esos fines se fijan las siguientes normas:

1. La inviolabilidad de la vida;
 2. La seguridad individual;
 3. La inviolabilidad del domicilio;
 4. La libertad de tránsito;
 5. A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe;
 6. Libertad de pensamiento;
 7. Libertad de asociación y de reunión;
 8. Libertad de conciencia y de cultos;
 9. Inviolabilidad de la correspondencia;
 10. Libre acceso a los medios de información;
 11. Libertad de trabajo;
 12. Libertad de empresa;
 13. Derecho de propiedad;
 14. Protección de la propiedad intelectual;
 15. Protección de la familia;
 16. Libertad de enseñanza;
 17. Protección del Estado a la desocupación, la enfermedad, la incapacidad y la vejez."
19. Están contemplados los derechos previstos en el Pacto y los demás instrumentos de derechos humanos de manera principal por la Constitución de la República, así como por la ratificación de dichos instrumentos por el Congreso Nacional que los convierte en disposiciones internas de carácter obligatorio.
20. En lo tocante a la derogación de tales prerrogativas, los ordinales 7 y 8 del artículo 55 de la Constitución de la República señalan que:
- "En caso de alteración de la paz pública, y si no se encontrare reunido el Congreso Nacional, decretar donde aquella exista, el estado de sitio y suspender el ejercicio de los derechos que según el artículo 37, inciso 7 de esta Constitución, se permite al Congreso suspender; podrá también, en caso de que la soberanía nacional se encuentre en peligro grave e inminente, declarar el estado de emergencia nacional con los efectos y requisitos indicados en el inciso 8 del mismo artículo.

En caso de calamidad pública podrá, además, decretar zonas de desastres aquellas en que se hubieren producido daños, ya sea a causa de meteoros, sismos, inundaciones o cualquier otro fenómeno de la naturaleza, así como a consecuencia de epidemias.

En caso de violación de las disposiciones contenidas en los apartados a) y d) del inciso 10 del artículo 8 de esta Constitución, que perturben o amenacen perturbar el orden público o la seguridad del Estado o el funcionamiento regular de los servicios públicos del Estado o de utilidad pública o impidan el desenvolvimiento de las actividades económicas, el Presidente de la República adoptará las medidas provisionales de policía y seguridad necesarias para conjurar la emergencia, debiendo informar al Congreso de esa emergencia y de las medidas adoptadas."

Estos ordinales prevén los casos y circunstancias en los cuales, previo decreto del estado de emergencia, pueden autorizarse restricciones a tales derechos.

21. Estos casos atañen fundamentalmente a situaciones en que la soberanía nacional se encuentre en peligro grave e inminente, así como aquellos en que el orden público, la seguridad misma del Estado o el funcionamiento regular de los servicios públicos de utilidad pública se encuentren perturbados o amenazados. Esta prerrogativa puesta a cargo del Presidente de la República sólo puede ejercerse en caso de que el Congreso Nacional no se encontrare reunido, pues fuera de esta especie dicha facultad le es conferida a otro poder del Estado por los incisos 7 y 8 del artículo 37 de la Constitución, los que dicen textualmente lo siguiente: "En caso de alteración de la paz o en el de calamidad pública, declarar el estado de sitio o suspender solamente donde aquellas existan, y por el término de su duración, el ejercicio de los derechos individuales consagrados en el artículo 8, en sus incisos 2, letras b), c), d), e), f), g) y 3, 4, 6, 7 y 9. En caso de que la soberanía nacional se encuentre expuesta a un peligro grave e inminente, el Congreso podrá declarar que existe un estado de emergencia nacional, suspendiendo el ejercicio de los derechos individuales, con excepción de la inviolabilidad de la vida, tal como lo consagra el inciso 1) del artículo 8 de esta Constitución. Si no estuviere reunido el Congreso, el Presidente de la República podrá dictar la misma disposición que conllevará convocatoria del mismo para ser informado de los acontecimientos y las disposiciones tomadas". Sin embargo, en ningún caso o circunstancia se prevé la excepción de inviolabilidad de la vida.

22. El texto constitucional vigente en la República Dominicana prevé en el ordinal 14 de su artículo 37, como una atribución del Congreso Nacional la de aprobar o desaprobar los tratados y convenciones internacionales que celebre el poder ejecutivo; de aquí que estos instrumentos pasan a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico nacional con el mismo rango o jerarquía que cualquier disposición ordinaria. En consecuencia, los instrumentos de derechos humanos deben ser sometidos a estos procedimientos antes de contar con sus ejecutorias en el territorio nacional.

23. Como ya se ha dicho, tanto los instrumentos de derechos humanos como cualquier tratado o convenio internacional para poder ser invocado, ya sea ante los tribunales de orden judicial, instancias administrativas o de cualquier otra índole, deben ser previamente sancionados, vale decir, ratificados por el Congreso Nacional, por lo que ningún particular puede invocar tratado o convenio alguno ni ser aplicado por ninguna instancia ni jurisdicción sin antes haber sido convertido en una ley nacional el tratado o convenio de que se trate.

24. A nivel gubernamental no existe ninguna entidad que de manera directa vele por la vigilancia de la aplicación de los derechos humanos, aunque a través de la Procuraduría General de la República, órgano vigilante de las aplicaciones y sanciones a la violación de los derechos humanos, se ejerce una supervigilancia.

25. La mayor difusión de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos la realizan los organismos no gubernamentales diseminados en toda la geografía nacional, los cuales promueven y difunden a través de foros, mesas redondas y otros tipos de debates, no sólo el contenido, sino la aplicación y vigencia de dichos instrumentos en nuestro país.

26. La Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores ha solicitado de manera oficiosa la cooperación para la creación en el país de un centro de derechos humanos; igual ha solicitado cartillas ilustradas sobre los derechos humanos a los fines de distribuir las en las escuelas públicas, universidades, etc., con el propósito de que su difusión sea incorporada como una asignatura, tanto en la educación básica como en la superior.

II. INFORMACION RELATIVA A LOS ARTICULOS DE
LAS PARTES I, II Y III DEL PACTO

Artículo 2

27. La República Dominicana, como signataria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra y garantiza a todos los individuos que residen en el territorio nacional todos los derechos y prerrogativas previstos en la ley sustantiva del Estado, las leyes adjetivas, así como en los pactos y convenciones suscritos por el Estado dominicano. De manera específica, el artículo 11 del Código Civil reconoce a los extranjeros los mismos derechos civiles que los consagrados a los dominicanos por los tratados que el país del extranjero le reconoce, en virtud del principio de reciprocidad.

28. En suma, en la República Dominicana no existe discriminación por causa de origen nacional, social, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

29. La situación de los extranjeros que vienen al país está reglamentada por la Ley 95 del año 1939 sobre inmigración, que clasifica a los extranjeros admitidos en el territorio nacional de la manera siguiente:

"Artículo 3 - Ley 95. Los extranjeros que deseen ser admitidos en el territorio dominicano, serán considerados como inmigrantes o como no inmigrantes. Los extranjeros que deseen ser admitidos serán inmigrantes, a menos que se encuentren dentro de una de las siguientes clases de no inmigrantes:

1. visitantes en viaje de negocios, estudio, recreo o curiosidad;
2. personas que transiten a través del territorio de la República en viaje al extranjero;
3. personas que estén sirviendo algún empleo en naves marítimas o aéreas;
4. jornaleros temporeros y sus familias.

Los extranjeros admitidos como inmigrantes pueden residir indefinidamente en la República. A los no inmigrantes les será concedida solamente una admisión temporal y ésta se regulará por las condiciones prescritas en el Reglamento de Inmigración N° 279 del 12 de mayo de 1939, a menos que un extranjero admitido como no inmigrante pueda ser considerado después como inmigrante mediante el cumplimiento cabal de los requisitos relativos a los inmigrantes.

Los jornaleros temporeros serán admitidos en el territorio dominicano únicamente cuando soliciten su introducción las empresas agrícolas y esto en la cantidad y bajo las condiciones que prescriba la Secretaría de Estado Interior y Policía, para llenar las necesidades de tales empresas y para vigilar su admisión, estada temporal y regreso al país de donde procedieron."

30. Considerando que es del más alto interés para la República regularizar la situación en el país de los ciudadanos haitianos, en su gran mayoría indocumentados aquí y en su propia nación, a fin de definir su condición de inmigrantes con permiso de residencia temporal o de jornaleros por períodos determinados, especialmente de quienes trabajan en las factorías, bateyes y cañaverales de los ingenios azucareros, al mismo tiempo que suscribir un contrato, redactado en los dos idiomas en que se divide la isla, donde consten las prerrogativas de este bracero y las condiciones de la labor a realizar y que es imprescindible redoblar esfuerzos, tanto de parte del Gobierno nacional como del sector privado, destinados a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores nacionales y extranjeros que laboran en las duras tareas de siembra, cultivo, corte y acarreo de la caña, el poder ejecutivo dictó su Decreto N° 417-90, donde en su artículo 1 da instrucciones a la Dirección General de Migración de continuar a la mayor celeridad la labor de regularizar la presencia en nuestro territorio de todos los nacionales haitianos, determinando su condición de inmigrantes con permiso de residencia temporal o de jornaleros a término fijo, especialmente de aquellos que trabajan como braceros en la siembra, cultivo, corte y acarreo de la caña en los bateyes, factorías y oficinas de ingenios azucareros. Las personas físicas o morales que utilicen a estos ciudadanos haitianos como trabajadores, sea cualquiera el tipo de su labor, están obligados a reportarlo.

Artículo 3

31. Con relación a este artículo del pacto, nuestra Constitución, en la primera parte del artículo 8, reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos. Este párrafo no hace distinción entre hombre y mujer; se refiere a la persona humana sin ningún tipo de discriminación, tal como lo señala el artículo 26 del pacto.

32. Asimismo, la participación de la mujer en los estudios, tanto a nivel secundario como superior, está muy por encima de la de los hombres. Así encontramos que en el año 1990 la participación de la mujer en edades de 0 a 19 años en las escuelas fue de un 57,36%, en contraste con el 42,64% de varones; igual fenómeno encontramos en las universidades: la participación de la mujer fue de 56,03% y la de los hombres de 43,97%.

Artículo 4

33. En este aspecto nos remitimos a lo consignado en los párrafos 19 a 21 supra. Sin embargo, es preciso resaltar que en ningún caso en que es preciso derogar circunstancialmente los derechos consagrados en el Pacto y los demás instrumentos, dichas derogaciones entrañan en forma alguna discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, nacionalidad, religión u origen social.

34. Asimismo, es preciso consignar que desde 1965 no ha sido necesario imponer derogaciones a los derechos consagrados en el Pacto y los demás instrumentos sobre derechos humanos ni por motivo de calamidad pública, ni por estar en peligro la seguridad del Estado, únicos casos previstos por la Constitución de la República Dominicana para declarar el estado de excepción.

35. Como se ha dicho, en ningún caso o circunstancia se contempla la inviolabilidad de la vida.

36. En la República Dominicana ha desaparecido de la legislación penal la pena capital desde 1924.

37. En el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana en el año 1990, la República Dominicana fue de los países que apoyó la resolución de abolición de la pena de muerte sustentada por Italia, pero que lamentablemente no fue aprobada por los votos negativos de la mayoría.

Artículo 5

38. En la República Dominicana no ha habido ninguna interpretación del Pacto que sea invocada como fundamento por autoridades o por personas particulares para "emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él".

39. Con relación al párrafo 2, en la República Dominicana no se han expedido disposiciones legales que menoscaben o restrinjan los derechos humanos fundamentales ya reconocidos en leyes, convenciones, acuerdos, reglamentos o costumbres, con el pretexto de que en el Pacto no se los reconoce o los reconoce en menor grado.

Artículo 6

40. Desde el año 1924 se abolió la pena de muerte en nuestra legislación, lo que está claramente establecido en la parte del capítulo I del artículo 8 de la Constitución de la República, cuando señala "la inviolabilidad de la vida. En consecuencia no podría establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte".

41. La Ley N° 36 del 17 de octubre de 1965 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas de Fuego, reglamenta el uso de armas de fuego y sólo la Secretaría de Estado de Interior y Policía está facultada para expedir licencias para porte y tenencia de armas de fuego luego de cumplir las personas interesadas con los requisitos del artículo 16 de la Ley 36. Este titular también está facultado para cancelar las licencias concedidas cuando el poseedor de licencia incurra en violación del artículo 5, el cual establece:

"Quedan prohibidas las siguientes operaciones:

a) Recortar o hacer recortar carabinas, pistolas, revólveres, rifles, escopetas y cualquier arma de fuego.

b) Alterar marcas, calibres y numeraciones de armas.

c) Modificar, arreglar o transformar objetos, cosas o artículos de uso común y corriente en armas que puedan disparar proyectiles utilizando pólvora o cualquier otro explosivo, aire o gas.

d) Tener en su poder, vender, ocultar, transportar los objetos, cosas, artículos, cooperar o proporcionar los medios para la ejecución de lo señalado en los anteriores literales.

e) Tener o portar armas de fuego con licencias o permisos expedidos por militares de cualquier rango o funcionarios públicos, sin estar debidamente facultados por la ley para ello.

Párrafo. El funcionario que incurra en la violación del último literal, será destituido de su cargo sin perjuicio de cualquier otra sanción prevista en esta u otra ley".

42. En los últimos meses se han adoptado medidas restrictivas para el uso de armas, ya que muchas personas sin la licencia correspondiente portan armas, por lo que se está desarmando a la población civil para evitar la ocurrencia de mal uso de las armas de fuego.

43. Por otra parte, en cuanto al ordinal b) del punto IV en el cuestionario sometido por el Comité de Derechos Humanos, debemos señalar que la tasa de mortalidad infantil para el año 1990 fue de 85 por mil, este porcentaje incluye tanto los nacionales como extranjeros.

44. El Gobierno tiene campaña permanente de atención a los niños, por lo que periódicamente se hacen vacunaciones gratuitas, de casa en casa; como consecuencia, casos de poliomielitis no se registran en el país.

Artículo 7

45. La segunda parte del acápite I del artículo 8 de la Constitución dice: "No podrá establecerse en ningún caso la tortura ni ninguna otra pena o procedimiento vejatorio o que implique la pérdida o la disminución de la integridad física o de la salud del individuo".

46. Asimismo, el artículo 5 de la Ley N° 224 del 26 de junio de 1984 sobre régimen penitenciario dice:

"Los reclusos no podrán ser objeto de torturas, maltratos, vejaciones o humillaciones de ninguna especie. Solamente podrán usarse medidas de seguridad en los casos que esta misma ley contemple.

El o los miembros del penal que ordenen o realicen tales excesos serán sancionados con suspensión de su empleo sin disfrute de sueldo hasta por treinta días, sin perjuicio de la responsabilidad penal que le correspondiere. En caso de reincidencia serán sancionados con destitución.

Podrán, sin embargo interponer sus quejas ante el alcaide o quien haga sus veces, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la presente ley, cuando consideren que han sido víctimas de una arbitrariedad. En caso de no ser atendida su queja tendrán derecho a presentarla ante la Dirección General de Prisiones, que por esta ley se crea."

47. Las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos inspiró la Ley sobre régimen penitenciario.

48. Los reclusos encausados o sujetos a prisión preventiva gozan de una presunción de inocencia y deberán ser tratados en consecuencia. En cuanto lo permita el establecimiento, los encausados podrán, si lo desean, alimentarse por su propia cuenta, procurándose alimentos del exterior por conducto de la dirección, de su familia o de sus amigos, también se autorizará al preventivo para que, si lo desea, use sus propias prendas de vestir y su ropa de cama, siempre que estén aseados y decorosos. Si el preventivo vistiere uniforme, éste será distinto que el de los reclusos condenados por sentencia definitiva. Se permite que los reclusos preventivos sean atendidos por su propio médico o dentista. Estas enunciaciones están previstas en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley N° 224 sobre régimen penitenciario.

49. Según el artículo 1 de la Ley N° 224 sobre régimen penitenciario, los establecimientos penales se clasifican en penitenciarías, cárceles, presidios e institutos especiales.

50. En las penitenciarías cumplirán sus condenas los reclusos sujetos a penas de privación de libertad superiores a dos años; en los presidios lo harán los condenados a penas inferiores a dos años; en las cárceles permanecerán los reclusos mientras dure su prisión preventiva.

51. Institutos especiales son aquéllos donde son recluidos condenados con características especiales tales como: enfermos mentales, reclusos primarios o que se encuentren dentro del período de prueba. Podrán ser establecimientos abiertos o granjas agrícolas.

52. El poder ejecutivo determinará los lugares en que existan establecimientos de una u otra clase, pero en cada distrito judicial existirá necesariamente una cárcel.

53. Cuando en la localidad no existieran construcciones separadas, en un mismo edificio podrán ser alojados reclusos que debieran estar internados en penitenciarías, presidios y cárceles, debidamente clasificados.

Artículo 8

54. En la República Dominicana la esclavitud es una institución abolida desde el año 1822.

Artículo 9

55. La Constitución, en el acápite 2 del artículo 8 reconoce:

"La seguridad individual. En consecuencia: a) no se establecerá el apremio corporal por deuda que no proviniera de infracción a las leyes penales; b) nadie podrá ser reducido a prisión ni cohibido en su libertad sin orden motivada y escrita de funcionario judicial competente, salvo el caso de flagrante delito; c) toda persona privada de su libertad sin causa o sin formalidades legales, o fuera de los casos previstos por las leyes, será puesta inmediatamente en libertad a

requerimiento suyo o de cualquier persona; d) toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial competente dentro de las cuarenta y ocho horas de su detención o puesta en libertad; e) todo arresto se dejará sin efecto o se elevará a prisión dentro de las cuarenta y ocho horas de haber sido sometido el arrestado a la autoridad judicial competente, debiendo notificarse al interesado dentro del mismo plazo, la providencia que al efecto se dictare; f) queda terminantemente prohibido el traslado de cualquier detenido de un establecimiento carcelario a otro lugar sin orden escrita y motivada de la autoridad judicial competente; g) toda persona que tenga bajo su guarda a un detenido estará obligada a presentarlo tan pronto como se lo requiera la autoridad competente.

La Ley de hábeas corpus determinará la manera de proceder sumariamente para el cumplimiento de las prescripciones contenidas en las letras a), b), c), d), e), f) y g) y establecerá las sanciones que proceda."

56. En la práctica los detenidos pueden avisar a sus familiares por medio de teléfono o por personas que se percaten de la detención e informan a los familiares. Es frecuente que los familiares, al notar la desaparición de un miembro familiar, se apersonen a los distintos destacamentos policiales y constaten dónde está. No hay un procedimiento regular para informar a los familiares; una vez esto sucede el abogado inicia sus gestiones sin ninguna dilación.

57. Interpretando el artículo 8, ordinal 2, letra d) de la Constitución de la República antes señalado, queremos decir que el plazo máximo de la detención de una persona, así como para ésta tomar contacto con un abogado que le asista en sus medios de defensa es de 48 horas contadas a partir del momento de la privación de libertad. Sin embargo, en la práctica no ocurre así en todos los casos y circunstancias, pues en ocasiones la prisión previa a sometimiento formal cede a este plazo.

58. Actualmente la población carcelaria en la República Dominicana está integrada en más de un 70% por preventivos. Con miras a disminuir esta alarmante proporción, debido entre otras cosas al limitado número de tribunales penales existentes en el país, se han habilitado días usualmente no laborables.

59. El recurso extraordinario de hábeas corpus instituido en nuestro país desde el año 1914, modificado por la Ley N° 10 de 1978, en el artículo 1 dispone: "Todo el que por cualquier causa haya sido privado de su libertad en la República Dominicana tiene derecho, sea a petición suya o de cualquier persona, excepto cuando haya sido detenido por sentencia de juez o tribunal competente, a un mandamiento de hábeas corpus con el fin de averiguar cuáles son las causas de la prisión o privación de su libertad y para que en los casos previstos se le devuelva ésta". El mandamiento de hábeas corpus podrá ser requerido, expedido y entregado cualquier día, pero el caso no será visto sino en día hábil o habilitado especial al efecto. Señala además que no es imprescindible la presencia del impetrante, el que puede hacerse representar

sin necesidad de un poder por un abogado o por cualquier defensor que postule en su nombre. Cuando el juez apoderado considere que no existe la apariencia o la presunción, en el caso que examina, de que la persona privada de libertad es culpable del hecho punible debe ordenar la cesación de la prisión de ésta.

60. En la práctica este procedimiento es usado con mucha frecuencia, ya que todas las personas privadas de libertad tienen acceso al mismo y los jueces deben conocerlo.

61. Entre las dificultades con que puede tropezar el cabal cumplimiento de este procedimiento, encontramos que no obstante el juez dictar orden de libertad contra un detenido acusado de narcotraficante, el Ministerio Público apela esta disposición del juez.

Artículo 10

62. La República Dominicana consideró que el establecimiento de un "sistema penitenciario" inspirado en los conceptos modernos de la penología y que al mismo tiempo se adapte a las posibilidades materiales y humanas del país, exige antes que nada de la elaboración de una ley básica que comprenda todas aquellas normas y conceptos orientados de la política aplicable en esta materia y que esa ley debe contener principios generales que puedan ser desarrollados a través de reglamentos, para su correcta aplicación, por lo que en el año 1984 dictó la Ley sobre régimen penitenciario, que en su capítulo II crea la Dirección General de Prisiones como un organismo central dependiente de la Procuraduría General de la República Dominicana y bajo cuya dirección y control estarán todos los establecimientos penales del país (art. 6). El artículo 7 de esta Ley señala: "La Dirección General de Prisiones tendrá a su cargo, de manera principal, la atención de los reclusos y elementos antisociales que la ley designe, con miras a obtener su readaptación, eliminar o disminuir su peligrosidad y atender sus necesidades de orden moral o material, en coordinación con otros servicios afines, sean éstos de carácter público o privado".

63. El capítulo III sobre segregación de los reclusos dispone en su artículo 11 que: "Habrá establecimientos separados para hombres y mujeres. En aquellas localidades en que esto no fuera posible, se habilitarán, en un mismo establecimiento, secciones totalmente independientes, de tal modo, que no pueda existir comunicación alguna entre las clases de reclusos mencionados. Los establecimientos para menores seguirán regidos por su ley especial".

Artículo 11

64. El artículo 8 de la Constitución en su párrafo 2 señala que no se establecerá el apremio corporal por deuda que no proweniere de infracción a las leyes penales.

Artículo 12

65. El artículo 8 de la Constitución en su ordinal 4 establece: "La libertad de tránsito, salvo las restricciones que resultaren de las penas impuestas judicialmente, o de las leyes de policía, de inmigración y de sanidad". Esto

sin hacer distinción entre nacionales y extranjeros. Los extranjeros que se encuentran en situación legal en el país, tienen libertad de circular libremente y pueden elegir su residencia donde lo deseen, pueden también salir libremente, y los dominicanos, salvo algún impedimento por violación a las leyes penales, pueden salir libremente, y entrar a nuestro territorio siempre. El nacional dominicano en todas las circunstancias puede entrar libremente al país.

66. El artículo 85 del Código Penal establece que se "castigará con la pena de destierro a todo aquel que, con actos no aprobados, ni autorizados por el Gobierno expusiera a los dominicanos a experimentar represalias, en sus personas o en sus bienes".

67. El capítulo II del Código Penal en su artículo 37, reza: "Todo condenado a destierro será llevado por orden del Gobierno, fuera del territorio de la República. La duración del destierro no podrá exceder de tres años ni bajar de uno".

68. Aunque esta pena está establecida en nuestra legislación, entre otros en el artículo 115 del Código Penal, que dice: "Si la orden hubiera emanado de un ministro de Estado, o si este funcionario hubiere cometido uno de los actos mencionados en el artículo precedente, y si después de haber solicitado la revocación de la disposición, se negare a ello, o se descuidare en hacerla enmendar, se le impondrá la pena de destierro, previa acusación decretada conforme a la Constitución", en la práctica no se aplica la pena de destierro.

Artículo 13

69. La Ley de migración N° 95 del 14 de abril de 1939 en su artículo primero señala que: "El territorio de la República está abierto a la entrada de extranjeros de buena conducta y de buena salud, bajo las condiciones y restricciones impuestas por las leyes".

70. El artículo 13 de esta ley señala que:

"Los siguientes extranjeros serán arrestados y deportados bajo mandamiento del Secretario de Interior y Policía o de otro funcionario designado por él para esos fines:

1) Cualquier extranjero que entre a la República después de la fecha de la publicación de esta Ley, por medio de falsas o engañosas declaraciones o sin la inspección y admisión de las autoridades de migración en uno de los puertos señalados de entrada;

2) Cualquier extranjero que entre en la República después de la publicación de esta Ley, que no fuera legalmente admisible en el momento de entrada;

3) Cualquier extranjero que se mezclare, asociare en actividades tendientes a subvertir el Gobierno dominicano o traficare con narcóticos en violación de la ley o se mezclare en otras actividades contrarias al orden y seguridad públicos;

- 4) Cualquier extranjero condenado por un crimen, después de la fecha de entrar en vigor esta Ley, cometido dentro de los cinco años después de su entrada, punible con trabajos públicos o de reclusión;
- 5) Cualquier extranjero que practicare la prostitución o fuere inquilino de una casa de prostitución o sea agente de ésta;
- 6) Cualquier extranjero que se convirtiere en carga pública dentro de los cinco años después de su entrada, ya por incapacidad, ya por indigencia, y que probablemente continúe siéndolo;
- 7) Cualquier extranjero que permaneciere en la República en violación de cualquier limitación o condición bajo las cuales hubiere sido admitido como no inmigrante;
- 8) Cualquier bracero que hubiere entrado en la República dentro de un año anterior a la fecha de entrar en vigor esta Ley sin haber sido admitido para residir permanentemente;
- 9) Cualquier extranjero que poseyera un permiso de residencia previo a la fecha de entrada en vigor de esta Ley y que a la expiración de dicho permiso no hiciera una solicitud para obtener un permiso de residencia, según se requiere por esta Ley.
- 10) Cualquier extranjero que hubiere entrado a la República anteriormente a la fecha de estar en vigor esta Ley, que no poseyere un permiso de residencia y que dentro de los tres meses de esta fecha no solicitare un permiso de residencia, según lo requiere esta Ley;
- 11) Cualquier extranjero que dejare de obtener la renovación de su permiso de residencia según lo requiere esta Ley.
 - b) Las reglas prescritas en las cláusulas 2, 3, 4, 5 y 6 de este artículo no se alterarán por el hecho de que el extranjero poseyere un permiso de residencia. En ese caso, este permiso será devuelto y cancelado al efectuarse la deportación.
 - c) En los casos previstos en las cláusulas 9, 10 y 11 de este artículo, si la deportación aparejare dificultades que se salieren de lo ordinario, el extranjero puede ser descargado y se le permitirá hacer una solicitud para un permiso de residencia o para la renovación de dicho permiso.
 - d) La deportación puede tener efecto dentro de la cláusula 3 de este artículo en cualquier tiempo después de la entrada, pero no se efectuará bajo ninguna otra cláusula a menos que el arresto en el procedimiento de deportación se hiciera dentro de cinco años después de la causa de origen de la deportación.

e) Ningún extranjero será deportado sin haber sido informado de los cargos específicos que motivan su deportación, ni sin que se le haya dado una justa oportunidad para refutar dichos cargos de acuerdo con el Reglamento de Migración N° 279, del 12 de mayo de 1939, salvo en los casos del artículo 10, inciso 1) y del artículo 13, inciso 3) de la presente Ley.

f) En los casos de deportación, el extranjero de que se trate podrá ser arrestado hasta por tres meses, por orden del Secretario de Estado de Interior y Policía o del Director General de Migración. Si la deportación durante ese tiempo no pudiere ejecutarse por no obtención de pasaporte o visa de un documento de viaje, el extranjero podrá ser sometido al Fiscal y el Tribunal Correccional apoderado dispondrá, por sentencia, que permanezca en prisión por un período de seis meses a dos años, según la seriedad del caso. Sin embargo, si después del proceso o de la sentencia el extranjero fuere provisto por quien corresponda de pasaporte o visa de documento de viaje, haciéndose posible su salida para el exterior, será excarcelado para este fin por el Fiscal, a solicitud del Secretario de Estado de Interior y Policía o del Director General de Migración, sobreseyéndose el proceso o quedando sin efecto la sentencia. Las sentencias no serán susceptibles de ningún recurso."

70. También se señala por modificación de la Ley N° 1.559 del 31 de octubre de 1946 que ningún extranjero será deportado sin que se le haya dado una justa oportunidad para refutar dichos cargos.

71. Los tribunales de la República podrán también ordenar la deportación de todo extranjero que incurriere en las faltas del artículo 13 de la Ley N° 95 sobre migración como pena principal cuando el caso sea sometido por el Director del Departamento Nacional de Investigaciones.

72. Los tribunales podrán también ordenar la deportación como pena accesoria cuando el extranjero haya cometido un crimen o delito cuya gravedad amerite esa sanción.

73. El párrafo f) del artículo 13 de la Ley de migración de 1939, expuesto anteriormente, fue modificado por la Ley N° 1.559 del 31 de octubre de 1946.

74. La sección XIII de la Ley de migración, en su título Deportación, establece que los inspectores de migración deben hacer una investigación completa acerca de cualquier extranjero, todas las veces que existan informes veraces para creer que el extranjero se encuentra en la República en violación a la Ley de migración. Si de esta investigación resultara que el extranjero ameritara ser deportado, el Inspector de Migración solicitará al Directorio General de Migración un mandamiento de arresto, expresando los hechos y mostrando las razones específicas por las cuales el extranjero apareciere sujeto a ser deportado. Si el extranjero admitiere cualquier cargo que le expusiere a la deportación, se hará un memorándum con ese fin que firmará el inspector y también el extranjero si fuere posible. Si el extranjero negara los cargos debe demostrar que está legalmente en el país, teniendo derecho a una declaración sobre su llegada. Es potestativo del Secretario de Estado de Interior y Policía determinar si cancela cualquier procedimiento de deportación si encontrare que el extranjero no amerita ser deportado, como también puede conceder una oportunidad para que el extranjero pueda salir voluntariamente del país en un período determinado.

Artículo 14

75. El artículo 23 de la Constitución de la República, en su ordinal 1 señala que:

"Son atribuciones exclusivas del Senado:

1. Elegir los jueces de la Suprema Corte de Justicia, jueces de las Cortes de Apelación, del Tribunal de Tierras, de los Juzgados de Primera Instancia, los jueces de instrucción, los jueces de paz y sus suplentes, los jueces de cualesquiera otros tribunales del orden judicial creados por la Ley."

76. En verdad se ha cuestionado la forma de seleccionar los jueces, dejando entrever que podría ejercer presión el partido político mayoritario en el Senado; es por ello que se trata de crear el Consejo de la Magistratura, lo que traería como consecuencia una reforma constitucional que desde hace mucho tiempo están planteando los políticos.

77. En esta nueva legislatura la selección de jueces, aunque hecha por el Senado, su Comisión de Justicia ha querido que participen en esta selección no sólo el Colegio de Abogados y asociaciones afines, sino también la comunidad; por ello personas que han estado preseleccionadas han sido cuestionadas en su comportamiento y el Senado ha rechazado su elección. Esto es muy importante, pues de una justicia sana depende la salud de un pueblo.

78. La Ley de organización judicial N° 821, del 21 de noviembre de 1927, regula todo ordenamiento judicial en nuestro país. También el artículo 67 de la Constitución confiere facultad a la Suprema Corte de Justicia para ejercer la más alta autoridad disciplinaria sobre todos los miembros del poder judicial, pudiendo imponer la suspensión o destitución en la forma que determina la ley.

Artículo 15

79. El artículo 47 de la Constitución señala que "La Ley sólo dispone para el porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que está subjudice o cumpliendo condena. En ningún caso la ley ni poder público alguno podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior".

80. El artículo 4 del Código Penal reza que las contravenciones, los delitos y los crímenes que se cometan no podrán penarse sino en virtud de una disposición de la ley promulgada con anterioridad a su comisión. Ya constituciones anteriores traen disposiciones similares, como "a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda, ni impedírsele lo que la ley no prohíbe". Tampoco el juez puede imponer penas por analogías, ya que nuestros tribunales se han pronunciado al respecto, pues no hay contravenciones, delitos ni crímenes sino cuando el hecho está penado por la ley, sin que en ningún caso puedan los jueces imponer penas por analogía, sea cual fuese el carácter del hecho.

81. La sanción debe existir en el momento de la realización del hecho.

Artículo 16

82. El derecho dominicano reconoce a todo ser humano como "persona", es decir como sujeto de derechos y obligaciones.

Artículo 17

83. El ordinal 3 del artículo 8 de la Constitución de la República se refiere a la inviolabilidad de domicilio, señalando que ninguna visita domiciliaria puede verificarse sino en los casos previstos por la ley y con las formalidades que ella prescriba.

Inviolabilidad de la correspondencia

84. Asimismo, el ordinal 9 del mismo artículo 8 de la Constitución habla de la inviolabilidad de correspondencia y demás documentos privados, los cuales no podrán ser ocupados ni registrados sino mediante procedimientos legales en la sustanciación de asuntos que se ventilen en la justicia. Es igualmente inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica y cablegráfica.

Inviolabilidad del domicilio

85. El Código Penal de la República Dominicana, en su párrafo V bajo el título "Abusos de autoridad contra los particulares", dispone en su artículo 184 "Los funcionarios del orden administrativo o judicial, los oficiales de policía, los comandantes o agentes de la fuerza pública que, abusando de su autoridad, allanaren el domicilio de los ciudadanos, a no ser en los casos y con las formalidades que la ley prescribe, serán castigados con prisión correccional de 6 días a un año, y multa de 16 a 100 pesos, sin perjuicio de lo que dispone el párrafo 2) del artículo 114. Los participantes que, con amenazas o violencias, se introduzcan en el domicilio de un ciudadano, serán castigados con prisión de 6 días a 6 meses, y multa de 10 a 50 pesos", y en su artículo 187, "Los funcionarios o agentes del gobierno, los encargados de las oficinas de correos o sus dependientes y auxiliares, que intercepten o abran las cartas confiadas a la estafeta, o que faciliten los medios de que se intercepten o abran, serán castigados con prisión de 6 meses a 2 años, y multa de 10 a 100 pesos. También serán castigados con inhabilitación absoluta desde uno hasta 5 años, para cargos y oficios públicos".

Derecho al secreto

86. Asimismo, el artículo 378 del Código Penal se refiere también a los particulares cuando dice: "El que para descubrir secretos de otro, se apodere de sus papeles o cartas, y divulgue aquéllos, será castigado con las penas de tres meses a un año de prisión, y multa de 25 a 100 pesos. Si no los divulgare, las penas se reducirán a la mitad. Las penas no son aplicables a los esposos, padres, tutores o quienes hagan sus veces, en cuanto a los papeles o cartas de sus cónyuges o de los menores que se hallen bajo su tutela o dependencia".

Libertad de conciencia

87. El principio consagrado en el artículo 8, ordinal 8 de la Constitución de la República respecto a la libertad de conciencia y de cultos, está reglamentado por el Código Penal en su párrafo VIII, bajo el título "Delitos contra el libre ejercicio de los cultos", el cual dispone en sus artículos 260, 261, 262, 263 y 264 lo siguiente: "Los que con amenazas o vías de hecho obligaren o impidieren a una o más personas, el ejercicio de la religión católica, de uno de los cultos tolerados en la República, o la asistencia al ejercicio de esos cultos; los que del mismo modo impidieren la celebración de ciertas festividades, o la observancia de los días de precepto, y en general los que hicieren abrir o cerrar los talleres, tiendas o almacenes, para que se hagan o dejen de hacer ciertos trabajos, serán castigados, por ese solo delito, con una multa de 10 a 100 pesos, y prisión correccional de seis días a dos meses. Los que por medio de violaciones, desorden o escándalo, impidieren o turbaren el ejercicio de culto católico, y de las autoridades por la ley, dentro o fuera del templo o lugar destinado para ese ejercicio, serán castigados con la pena de prisión de seis días a dos meses, y multa de 10 a 100 pesos. El que con palabras o ademanes ultrajare a un ministro del culto católico, cuando se halle ejerciendo las funciones de su ministerio, o que para escarnecer los ritos, autorizados en la República, profanare objetos destinados al culto, serán castigados con multa de 10 a 100 pesos y prisión de un mes a un año. La pena de la degradación cívica se impondrá a los que maltrataren de obra a un ministro de un culto cuando se halle ejerciendo las funciones de su ministerio. Las disposiciones del presente párrafo sólo son aplicables a los desórdenes, ultrajes o vías de hecho cuyas circunstancias y naturaleza no estén penadas con mayor gravedad por el presente Código".

Artículo 18

88. La República Dominicana reconoce la libertad de conciencia y de cultos y como tal lo contempla el ordinal 8 del artículo 8 de la Constitución que señala "la libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y respecto a las buenas costumbres"; y con la finalidad de penalizar esta libertad consagrada constitucionalmente, el párrafo VIII del Código Penal, bajo el titular "Delitos contra el libre ejercicio de los cultos" en sus artículos 260 al 263, establece las normativas ya vistas en el artículo 17, anteriormente expuesto.

89. Como señalamos en el segundo informe, en la República Dominicana practican sus cultos de forma libre diversas religiones apegadas todas a nuestra legislación, que actúan de manera correcta y con verdadero servicio a la comunidad y como tales gozan de respeto y consideración.

90. Si estamos contemplando últimamente la aparición de sectas religiosas que de manera irregular e irrespetuosa quieren imponer sus creencias, esto de manera aislada todavía, hay que estar atentos para evitar que, las que no responden a religión conocida, hagan daño a nuestras poblaciones con prédicas que no invitan a la compenetración de todos los humanos.

Artículo 19

91. La doctrina y las concepciones jurídicas modernas exigen que toda ley de difusión del pensamiento garantice la libertad de expresión, salvo en los casos de abuso de la misma, una responsabilidad eficazmente exigida por los tribunales judiciales y la renovación de obstáculos económicos o de cualquier otra índole que se opongan a la libre expresión de las ideas. El mejor medio de alcanzar esas elevadas formalidades es el de dictar una disposición legal fundada en los siguientes principios: prohibición de toda medida preventiva, de toda intervención y de todo control administrativo en lo que concierne a la expresión de las ideas o a la comunicación de los hechos, y reducción al mínimo a las formalidades previas a la publicación. Como forma de garantizar el ejercicio de ese derecho la legislación dominicana prevé los casos en que puede ser exigida la responsabilidad "de los delitos de prensa, excluyéndose así toda posibilidad de represión arbitraria o peligrosa para la libertad de expresión", y en consecuencia dicta la Ley N° 6132 del 15 de diciembre de 1962 sobre expresión y difusión del pensamiento, que en su artículo 1 señala: "Es libre la expresión del pensamiento salvo que se atente contra la honra de las personas, el orden social o la paz pública".

92. Es materia constitucional cuando el artículo 8 en su ordinal 6 establece: "Toda persona podrá, sin sujeción a censura previa, emitir libremente su pensamiento mediante palabras escritas o por cualquier otro medio de expresión, gráfico u oral. Cuando el pensamiento expresado sea atentatorio a la dignidad y a la moral de las personas, al orden público o a las buenas costumbres de la sociedad, se impondrán las sanciones dictadas por las leyes".

93. Se prohíbe toda propaganda subversiva, ya sea por anónimos o por cualquier otro medio de expresión que tenga por objeto provocar desobediencia a las leyes, sin que esto último pueda coartar el derecho a análisis o a crítica de los preceptos legales.

Artículo 20

94. El literal c) del artículo 9 de la Constitución de la República, en su sección II, que habla de los deberes, establece: "Los habitantes de la República deben abstenerse de todo acto perjudicial a su estabilidad, independencia o soberanía".

95. Como corolario a este principio constitucional el artículo 91 del Código Penal castiga todo atentado que tenga por objeto "provocar la guerra civil, excitando a los ciudadanos o habitantes a armarse unos contra otros".

Artículos 21 y 22

96. El ordinal 11 del artículo 8 de la Constitución de la República en su literal a) establece que la organización sindical es libre, siempre que los sindicatos, gremios u otras asociaciones de la misma índole se ajusten en sus estatutos y en su conducta a una organización democrática compatible con los principios consagrados en esta Constitución y para fines estrictamente laborales y pacíficos.

97. Como complemento a este texto, el Código de Trabajo consagra el libro quinto a regular toda la actividad sindical de la República Dominicana en los artículos comprendidos del 293 al 361.

98. Hasta 1991 el Departamento de Registro Sindical de la Secretaría de Estado de Trabajo tenía registrados 2.210 sindicatos, de los cuales 447 son sindicatos de empresas, 919 sindicatos de oficio o de profesionales, 834 sindicatos independientes (personas no asalariadas, por ejemplo, billeteros, chóferes, etc.), 157 federaciones y 18 confederaciones.

99. Para la formación de un sindicato la ley exige un mínimo de 20 empleados.

Partidos políticos

100. Por otra parte, la Ley electoral dominicana marcada con el número 5884 del año 1962, establece en el artículo 64 las condiciones para el reconocimiento de los partidos políticos solicitado en ejercicio del derecho de asociación y de reunión consagrado en el ordinal 7 del artículo 8 de la Constitución. Dicho artículo 64 señala que "Podrá ser reconocida como partido político toda agrupación de ciudadanos que se organice de conformidad con las disposiciones de la Constitución y las leyes con el fin primordial de participar en la elección de ciudadanos aptos para los cargos públicos y de proponer a la realización de programas trazados conforme a su ideología particular".

101. El reconocimiento deberá ser solicitado a la Junta Central Electoral por los organizadores, quienes, entre otras cosas, deben presentar los documentos siguientes:

- a) La exposición, siquiera sumaria, de los principios, propósitos y tendencias que sustentará el partido;
- b) Nómina de sus órganos directivos provisionales, incluyendo un directorio, comité o junta directiva nacional provisional, con sede en la capital de la República, cuyo Presidente será el representante legal del partido en formación ante la Junta Central Electoral;
- c) Constancias de la denominación y el lema del partido, que sintetizarán en lo posible las tendencias o propósitos que animen a sus fundadores, sin incluir nombres o palabras alusivas a personas o prefijos que indiquen actitudes contrarias o en pro de prácticas, sistemas o regímenes, presentes o pasados, nacionales o extranjeros, ni ser susceptibles de inducir a confusión con los de otros partidos;
- d) Dibujos contentivos del símbolo, emblema o bandera con la forma y los colores que deberán distinguir al partido de cualesquiera otros ya existentes. A los símbolos, emblemas o banderas se aplicarán las mismas reglas que a los nombres o lemas. Además, no deberán consistir en todo ni en parte en el escudo o la bandera de la República, ni en ningún símbolo, imagen o emblema religioso;

- e) Una declaración firmada por los organizadores de que el Partido cuenta con un número de afiliados no menor de cinco (5) por ciento del número de electores inscritos en el Registro Electoral.

102. Es importante resaltar que el artículo 68 de la Ley electoral prohíbe a los partidos políticos realizar toda actividad que tienda o tenga por resultado suprimir, desconocer, disminuir o adulterar los derechos o garantías individuales y sociales que la Constitución consagra.

103. Por otra parte, cursa todavía en el Congreso Nacional el proyecto de código de trabajo, pero en esta pieza no se ha introducido revisión al derecho de huelga de los funcionarios públicos.

Artículo 23

104. Desde el año 1978 en que se introdujeron modificaciones al Código Civil en lo tocante a los derechos de los cónyuges en la comunidad matrimonial y a la autoridad paternal se estableció un régimen de igualdad o cogobierno entre marido y mujer. A partir de entoces corresponde a ambos cónyuges el derecho a elegir el domicilio conyugal, a ambos padres corresponde el ejercicio de la patria potestad y se estableció una especie de solidaridad entre los cónyuges con respecto a las deudas contraídas para el mantenimiento y conservación del hogar y la educación de los hijos comunes.

105. Esta Ley también estableció la igualdad de derechos y deberes para ambos cónyuges en lo relativo a la custodia, manutención, educación y tutela, salvo excepción hecha en el caso de que se trate de un hijo natural, situación en la cual, el padre que reconozca al hijo dentro de los primeros seis meses de nacimiento adquiere un derecho de exclusividad respecto a la guarda y custodia del hijo.

106. Esa misma Ley N° 855 del 22 de julio de 1978, garantiza los derechos de propiedad de la mujer casada al establecer en favor de ésta la posibilidad de requerir la anulación de los actos traslativos de dominio, realizados por el marido en fraude a los derechos de la mujer.

Artículo 24

107. A contrapelo de los pactos e instrumentos internacionales suscritos por el Estado dominicano, que establecen la igualdad de derechos de los hijos legítimos y naturales dentro de la familia y la sociedad, subsiste, en el derecho positivo dominicano la desigualdad en cuanto a vocación sucesoria entre el hijo natural y el legítimo en lo que respecta a la filiación paterna, de forma tal que si hay descendientes tienen derecho a la mitad de la parte hereditaria atribuida a un hijo legítimo o a los descendientes de éstos.

108. Aunque los pactos e instrumentos internacionales se convierten en ley interna una vez ratificados por el Congreso Nacional, en algunos casos no se adecua la legislación nacional vigente a los pactos o instrumentos internacionales.

109. El Código de Trabajo, en los artículos del 222 al 232, regula lo referente al trabajo de los menores. Dichos artículos expresan lo siguiente:

Artículo 222. Los menores de edad disfrutarán de los mismos derechos y tendrán los mismos deberes que los mayores, en lo que concierne a las leyes de trabajo, sin más excepciones que las establecidas en el presente Código.

Artículo 223. Se prohíbe el trabajo de menores de 14 años.

Artículo 224. Los menores de 18 años no podrán ser empleados ni trabajar de noche, durante un período de 12 horas consecutivas, el cual será fijado por el Secretario de Estado de Trabajo y que, necesariamente, no podrá comenzar después de las 8.30 horas de la noche, ni terminar antes de las 6.00 horas de la mañana. No están sujetos a las limitaciones de este artículo los menores de 18 años que realicen trabajos en empresas familiares en las que solamente estén empleados los padres y sus hijos o pupilos.

Artículo 225. La jornada de trabajo de los menores de 18 años no puede exceder, en ninguna circunstancia, de ocho horas diarias.

Artículo 226. Todo menor de 18 años que pretenda realizar labores en empresas de cualquier clase, acreditará su aptitud física para desempeñar el cargo de que se trate con una certificación médica expedida gratuitamente por un facultativo que preste servicios al Estado, al distrito nacional o a un municipio.

Artículo 227. Ninguna menor que no haya cumplido 16 años podrá dedicarse a negocios ambulantes sin autorización previa del Departamento de Trabajo o de la autoridad local que ejerza sus funciones. Se consideran negocios ambulantes la venta, ofrecimiento para la venta, colocación y distribución de artículos, productos mercancías, circulares, billetes de lotería, periódicos o folletos así como también limpieza de zapatos o cualquiera otro tráfico realizado en lugares públicos o de casa en casa. En toda otra disposición del Código de Trabajo, leyes que lo contemplan o modifiquen, decreto, reglamento o resoluciones, cuando se indique 18 años, se entenderá que esta edad queda reducida a 16 años.

Artículo 228. Los menores de 14 a 18 pueden ser empleados en conciertos o espectáculos teatrales hasta las 12 de la noche, previa autorización del Departamento de Trabajo o de la autoridad local que ejerza sus funciones.

Artículo 229. Se prohíbe el empleo de menores de 18 años en trabajos peligrosos o insalubres. La Secretaría de Estado de Trabajo determinará cuáles son estos trabajos.

Artículo 230. Ninguna menor de 18 años puede trabajar como mensajera en la distribución o entrega de mercancías o mensajes.

Artículo 231. Ningún menor de 18 años puede ser empleado en el expendio al detalle de bebidas embriagantes.

Artículo 232. Las disposiciones de este capítulo no se aplican a los menores empleados en trabajos del campo salvo lo prescrito en el artículo 229."

Artículo 25

110. Todos los dominicanos de uno u otro sexo podrán acceder a todas las funciones públicas con la única condición de estar capacitados para ello. Desde el año 1940 la mujer goza de todos los derechos civiles igual que el hombre. Tiene derecho a elegir y a ser elegida de la misma manera que el hombre; ya que con su trabajo coopera con el desarrollo del país, goza de todos los derechos. En la República Dominicana es muy frecuente y es práctica que la mujer tanto urbana como rural, quizás en mayor proporción que el hombre, se prepare a nivel universitario, se capacite para poder exigir su participación en el foro tanto nacional como internacional; de ahí que encontramos muchas mujeres al frente de secretarías importantes como finanzas, educación, salud y también como funciones de embajadoras representando nuestro país en la comunidad internacional.

111. La Constitución de la República en su artículo 100 señala que "La República condena todo privilegio y toda situación que tienda a quebrantar la igualdad de todos los dominicanos, entre los cuales no deben contar otras diferencias que las que resulten de los talentos o de las virtudes y, en consecuencia, ninguna entidad de la República podrá conceder títulos de nobleza ni distinciones hereditarias".

Artículo 26

112. En la República Dominicana es materia constitucional la igualdad de todas las personas, sin discriminación de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. El artículo 8 de la Constitución transcrito en artículos anteriores de este informe, que habla de los derechos individuales y sociales, no hace distinción; sólo se refiere a las personas, por lo que todo individuo que esté sobre nuestro territorio goza de los mismos derechos.

113. El artículo 100 de la Constitución también se refiere a la igualdad, a la no discriminación, artículo éste que se encuentra transcrito en la parte final del artículo 25 del presente informe.

Artículo 27

114. El artículo 11 del Código Civil señala que el extranjero disfrutará en la República Dominicana de los mismos derechos civiles que los concedidos a los dominicanos por los tratados de la nación a la que el extranjero pertenezca, y el artículo 13 del mismo Código señala que el extranjero a quien el Gobierno hubiese concedido fijar en la República su domicilio, goza de todos los derechos civiles mientras resida en el país; los extranjeros que residen en la República no están sectorizados, no hacen vida aislada, todos ellos se involucran en la actividad nacional, no se les prohíbe que usen su propio idioma, se respetan sus cultos y no existe discriminación de ningún

orden. Debido a lo pequeño de nuestro territorio y a las condiciones económicas de país subdesarrollado, no existe gran cantidad de extranjeros, a excepción de los nacionales haitianos que por razón geográfica ocupan con nosotros una parte de la isla.

115. Como ya hemos señalado, la libertad de cultos es materia constitucional. En la República Dominicana todas las personas que habitan en su territorio gozan de plena libertad de culto. Esto es muy respetado y así encontramos diversidad de religiones en todo el país, que practican en igualdad de condiciones nacionales y extranjeros.

116. En la República Dominicana a la fecha se encuentran registrados un total de 159.849 residentes legales de diferentes nacionalidades, pero como hemos señalado, se encuentran insertados a todos los habitantes que residen en el país, pues gozan de los mismos derechos civiles que los nacionales y pueden realizar sus actividades legales de forma normal; no tenemos minorías étnicas, religiosas ni lingüísticas en la República Dominicana.